

Prólogo de J. Jesús Lemus

JOSÉ LUIS MONTENEGRO

**EL DÍA
QUE CAYÓ
EL MENCHO**

© 2026, José Luis Montenegro

Formación: Alejandra Romero

Diseño de portada: Planeta Arte & Diseño

Fotografía de portada: © Getty Images

Fotografía de solapa: Cortesía del autor

Derechos reservados

© 2026, Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.

Bajo el sello editorial PLANETA M.R.

Avenida Presidente Masaryk núm. 111,

Piso 2, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo

C.P. 11560, Ciudad de México

www.planetadelibros.com.mx

Primera edición en formato epub: julio de 2026

ISBN: 978-607-39-4425-0

Primera edición impresa en México: julio de 2026

ISBN: 978-607-39-4402-1

El contenido de este libro es responsabilidad exclusiva del autor y no refleja la opinión de la editorial.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del *copyright*.

Queda expresamente prohibida la utilización o reproducción de este libro o de cualquiera de sus partes con el propósito de entrenar o alimentar sistemas o tecnologías de Inteligencia Artificial (IA).

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Arts. 229 y siguientes de la Ley Federal del Derecho de Autor y Arts. 424 y siguientes del Código Penal Federal).

Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra diríjase al CeMPro (Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, <http://www.cempro.org.mx>).

Impreso en los talleres de Litográfica Ingramex, S.A. de C.V.

Centeno núm. 162, colonia Granjas Esmeralda, Ciudad de México

Impreso y hecho en México - *Printed and made in Mexico*

ÍNDICE

PRÓLOGO DE J. JESÚS LEMUS	13
EN LA TIERRA DEL NARCO	17
EL SUEÑO AMERICANO	37
YO SOY EL MENCHO	47
LA FRACTURA	59
EL DÍA QUE CONOCÍ AL MENCHO	79
EL CÁRTEL DE LAS CUATRO LETRAS	109

LA CAÍDA DEL HEREDERO	127
EN ESTE NEGOCIO NO HAY AMIGOS	139
LOS CUINIS, S. A. DE C. V.	157
LA JEFA Y LAS FRANQUICIAS CRIMINALES	175
AL INTERIOR DEL CJNG	191
BIENVENIDOS A TAPALPA	211
RELEVO GENERACIONAL	225
LA GUERRA QUE SE AVECINA	249

EN LA TIERRA DEL NARCO

EN LA COMUNIDAD DE NARANJO DE CHILA, EN EL MUNICIPIO DE AGUILILLA, en Michoacán de Ocampo, la vida transita sin prisas. Lento. Muy lento. Nadie imaginó que, hace casi sesenta años, el 17 de julio de 1966, este sitio sería la cuna de un jefe: el hogar de Rubén Oseguera Cervantes.

Desde hace 15 años me he dedicado a la cobertura periodística del crimen organizado en México; sin embargo, pocos días antes del abatimiento del hombre que el mundo conocería como el Mencho, pude recorrer por primera vez la región que lo vio crecer. En este lugar, de noche, el termómetro rebasa los 20 °C; por la mañana, el sol arrecia hasta los 35. Durante todo el año hay 48 días completamente despejados y 209 con lluvia. Es semiárido. Cuando me instalé en la zona bordeada por los cerros de Santa Elena y

Las Conchas, aún no iniciaba la primavera, pero eso no era impedimento para que los gallos cantaran, puntuales, a las cuatro de la madrugada.

Los pobladores económicamente activos trabajan sus tierras; cultivan para venta o consumo familiar, y la principal actividad lucrativa es la crianza de ganado bovino. Los jóvenes se arraigan al mismo destino. Generación tras generación, los gestos se dictan por el sudor que cae de la frente. Los veo caminando por las calles de Naranjo de Chila, como fotografías desordenadas en un álbum familiar, transgresoras del paso del tiempo: un bucle que promete perpetuidad.

En la mesa, ante los platos y los cubiertos, la tradición y la identidad también tienen lugar. La sazón de la región es de esas que uno, al probarla por primera vez, sabe que no podrá olvidar. Unos días hay carnitas en la mesa; otros tantos, corundas o sopa tarasca. En Cuaresma nunca falta el pescado blanco. Pero, eso sí, hay oro verde durante todo el año. El aguacate es, sin duda, el mayor tesoro del pueblo.

Cuando uno mira el cielo de Naranjo de Chila, puede percatarse de que no hay contaminación por humos, polvos o gases provenientes de las industrias; tampoco se respiran los químicos que combaten plagas en cultivos, árboles o animales, ni mucho menos se sufre por aguas negras del drenaje depositadas en ríos, lagos, canales o estanques. La mayoría de las calles sigue sin estar pavimentada; en realidad, a nadie le importa. Al recorrerlas, el transporte público es escaso; en cambio, el polvo no. La mayor parte de la región cuenta con agua entubada. Hay plazas y jardines públicos, cancha deportiva y parque con juegos infantiles; pero no hay biblioteca, casa de la cultura ni salón de usos múltiples. No hay espacio para la erudición. O al menos no está a la vista.

Al quiosco de la plaza principal ya no se le da mantenimiento. La pintura fue carcomida por el calor. Cuatro faroles viejos acompañan esa antigua construcción. Cerca de ahí se escuchan pasos. Parecen el eco de los míos. Más bien son madres, aunque pocas, que a toda prisa recogen a sus hijos en la Escuela Primaria Rural Federal José María Morelos. El ambiente aún luce desolador. La plaza de toros cerró por un periodo indeterminado. Al telebachillerato comunitario no se le ha construido una sola barda. Es un llano.

El ruido en los alrededores es casi nulo. La música suena en viejos reproductores que no invitan a cantar o bailar ni al más alegre. Han aprendido a vivir en el silencio. La señal de televisión va y viene. El internet es modesto. Los teléfonos celulares funcionan por ratos, sobre todo cuando el brazo, extendido a los cielos, funge como antena y rastrea la cobertura idónea para marcar a otro poblado. Al menos no es necesario subir a los cerros de La Paloma o El Coruco. La orografía parece que les ha jugado una broma de mal gusto. Hay elevaciones significativas, cañones profundos y algunas laderas pronunciadas. Una tierra totalmente accidentada y de difícil acceso. Si se mira desde arriba, parece la pisada de un gigante en medio de la nada. Una huella indeleble: la del abandono.

Los naranjeños –gentilicio que se emplea para las personas oriundas de Naranjo de Chila– aún caminan con sigilo. Al transitar la calle 12 de octubre, se percibe que esa desaseada vialidad guarda las memorias de Rubén Oseguera, aquel niño rural, inquieto y ávido por aprender nuevos oficios. Hasta la fecha, nadie se atreve a señalar la que fue su morada. Ojalá pudieran borrar el recuerdo. «Prefiero no opinar», sugieren, a modo de consenso, todos los pobladores a los que pude increpar. El miedo sigue vigente. El miedo vive ahí.

A finales de la década de los setenta, con tan solo 11 años, Rubén abandonó sus estudios para enfocarse en la búsqueda de trabajo. Dos de sus hermanos, Antonio y Abraham, serían su eterna sombra. Una compañía fiel. Años más tarde, una familia de renombre solicitaba constantemente recolectores, empacadores y guardias para sus extensas plantaciones de aguacate en el entonces próspero pueblo de Aguililla. Se trataba de los Valencia. La otra sombra: el poder económico. Rubén –siempre audaz– supo entender la otra cara del negocio: la ilícita. Aquella gente era conocida por su vasta riqueza en oro verde, pero en medio de aquellos árboles frondosos se escondían inmensos plantíos de marihuana y amapola. El lado más perverso y pujante de su economía. Los doctores de Oseguera muy pronto se transformaron en criminales. Su mirada, tan penetrante e intimidatoria, le valió una fama de agresivo. Lo era. Sus más cercanos lo describían como «maldito». También lo era.

En 1980, al tiempo que la familia Valencia comenzó a darse cuenta de que el Mencho tenía talento para los negocios, Naranjo de Chila contaba con una población total de 1 449 personas, de las cuales solo el 25% eran económicamente activas. Las cifras del censo no pintaban un escenario alentador. Los naranjeños, en su mayoría analfabetas y con bajos niveles de asistencia a la educación primaria, constituían una comunidad desamparada.

Me pregunto qué orilla a una persona a dedicarse al contrabando de estupefacientes y a forjar un imperio con tentáculos en los 32 estados de la República mexicana, con presencia en cerca de cuarenta países alrededor del mundo. En Michoacán no nace cualquier persona. Es una tierra de gente brava que trabaja la tierra, a la buena y a la mala. Una región donde conviven hacendados y capos. Donde en el mismo huacal caben mangos y papayas, así

como marihuana y amapola. Territorio de hombres y mujeres con un profundo orgullo por su herencia indígena, cálidos en el trato, indiferentes al descanso y con un fuerte sentido de pertenencia. Se trata de gente sincera, amable, pero no ingenua. Son bondadosos si encuentran paz; son cabrones cuando perciben una amenaza real. Conocen las crisis y han aprendido a vivir con ellas. La normalización de la criminalidad es tan profusa que, a modo de sorna, la emplean en su cotidianeidad: «¿Engañarte? No, mi amor. Michoacán forma traficantes, no infieles».

* * *

Si bien es cierto que las crisis económicas pegan a todo el país, el caso de Michoacán es único. El estudio *Michoacán antes y durante la crisis o sobre los michoacanos que no se fueron de braceros*, publicado en 1987 por El Colegio de Michoacán, es muy enfático cuando refiere que las zonas vinculadas al dólar, ya sea por exportación, maquila, turismo o braceros —trabajadores agrícolas mexicanos contratados legalmente en Estados Unidos entre 1942 y 1964, tras la escasez de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)—, convierten algunas zonas en «lunares de prosperidad en medio de grandes espacios deprimidos». Esto ha permitido una «caprichosa evolución de la política económica» y ha condenado a la extinción a algunos parajes y convertido en polos de crecimiento a otros.

Para que Michoacán pudiera ponerse en el ojo del huracán, tuvo que pasar la Segunda Guerra Mundial, pues el conflicto provocó la escasez de mano de obra en el país vecino. Así, lugares como Culiacán se hicieron llamar «Nuevo Chicago» por los enfrentamientos entre policías, militares y gomeros de las zonas serranas;

a estos criminales se les llamó de forma peyorativa «gánsteres de huarache». Para 1950, la circunstancia se desplazó a Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Una década después, en 1960, la expansión del mercado de drogas a otras naciones fuera de México provocó la creación de al menos trescientas pistas clandestinas para el tráfico de opio solo hacia Estados Unidos. En 1977, la Operación Cóndor inició con la incursión de 10 000 soldados para acabar con el contrabando ilícito de estupefacientes, dejando una estela de torturas, violaciones, ejecuciones y desplazamientos forzados de la población a manos de elementos de la extinta Policía Judicial Federal (PJF). Ni con todo el poder del Gobierno se impidió que el tráfico de drogas siguiera floreciendo, sobre todo en el área conocida como Tierra Caliente.

Michoacán es el claro ejemplo de cómo un estado de la República ha sido tratado como un «estado parcelado» y controlado por casi una docena de ciudades consideradas la arteria financiera: Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, La Piedad, Huetamo, Sahuayo y Jiquilpan. Negligencia alarmante si se considera que la entidad se divide en 113 municipios, entre ellos Aguililla, que resguarda celosamente la comunidad de Naranjo de Chila, otrora hogar de Rubén Oseguera.

Y es que su accidentada orografía pone a regiones como Aguililla, Tepalcatepec o Tumbiscatío en desventaja frente a ciudades como Morelia. A pesar de no ser una de las zonas más accesibles de la entidad en aquellos años, esta encontró diferentes polos de desarrollo económico dependientes de una fusión comercial, la cual se fortaleció con el paso del tiempo con entidades del Bajío, tales como Guanajuato, Querétaro y la zona nororiente de Jalisco. Morelia adoptó el papel de centro comercial y de servi-

cios; se apoderó de las industrias manufacturera, de construcción y logística. Al igual que casi todas las capitales de las entidades federativas, centralizó el poder político y económico, discriminando el desarrollo social.

«Infancia es destino», reza una frase popular. Una década antes del nacimiento de Rubén Oseguera, en 1956, su tierra natal ya era un territorio orientado a la producción de granos básicos, según El Colegio de Michoacán. El maíz, ajonjolí, trigo y frijol representaban más del 80% del producto agrícola del estado. Según datos de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, se vivió una estrepitosa caída del 50% en 1961 y, para 1987, fluctuaba alrededor del 30%, durante el gobierno del entonces presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988).

Es precisamente durante los años ochenta cuando los campesinos michoacanos –como Rubén Oseguera y su familia– fueron víctimas de las devaluaciones, lo que provocó que su capital de trabajo fuera el principal producto de exportación. Sucedió un éxodo masivo de pobladores. A partir de esos años, y durante décadas, fueron el «principal expulsor de fuerza de trabajo del país», según el estudio consultado. Y es que, debido al pujante producto bruto agropecuario de Michoacán –solo superado por Jalisco y Sinaloa–, la economía basada en cultivos terminaba siendo frágil y vulnerable ante fenómenos sobre los cuales no se tenía injerencia, entre ellos, una abismal dependencia del mercado externo –el de Estados Unidos– y la nula vinculación con la economía horizontal, es decir, la regional.

Durante décadas, la producción local de Michoacán se caracterizó por su gran elasticidad. Cuando el mercado norteamericano requería aguacate, la zona de Uruapan satisfacía la demanda; si solicitaban puercos, La Piedad era líder en la porcicultura; si había

grandes pedidos de fresas, ya no recurrían a Irapuato, en Guanajuato: acudían a Zamora. El inigualable clima y la tierra fértil michoacana propiciaron que Tepalcatepec fuera la principal zona productora de melón y otros frutales; a la par crecía la producción forestal, solo por debajo de Chihuahua y Durango. Cuando el mercado internacional viró hacia la demanda de algodón, sandía y limón, Apatzingán se acopló y quintuplicó su población, lo que se traducía en mayor fuerza de trabajo, según explica el economista mexicoamericano David Barkin en su tesis *Los beneficiarios del desarrollo regional*, publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1972.

Aunque la explicación que brinda Barkin presupondría bonanza, el académico enfatiza en su obra que esta clase de proyectos «beneficiaron solo a unos cuantos campesinos con recursos» y, sobre todo, a los «agentes foráneos». Más tarde que temprano, los *brokers*, o intermediarios gringos, instalaron en Apatzingán lo que se denominó la nueva burguesía agraria. Porque ¿qué empresario o agente de Gobierno, conociendo el volumen de producción, el mercado de importaciones y los márgenes de ganancia, beneficiaría la economía de un país extranjero antes de priorizar la industria similar en su nación? Eso logró Estados Unidos: concentrar la demanda, provocar la sobreproducción en los cultivos, controlar la venta, motivar las pérdidas y fijar políticas comerciales en favor de su economía. Nada nuevo. El efecto perverso de un modelo de crecimiento distorsionado e injusto.

Lo anterior explicaría cómo, en tan poco tiempo, hubo industrias —como la del hierro— que atrajeron a habitantes de zonas como Aguililla a municipios como Lázaro Cárdenas. Así se dio la promesa de una mejor vida a través de la creación de «polos de desarrollo

regionales» como, en su momento, lo fue el proyecto de Las Truchas, un complejo siderúrgico en la desembocadura del río Balsas, en la costa michoacana. No hubo nada más desigual que estas enormes inversiones «frente a una estructura económica y social débil y aislada», tal como señala El Colegio de Michoacán. Mientras la población de Lázaro Cárdenas pasó de 24 000 a más de 100 000 habitantes en solo una década (de 1970 a 1980), apenas dos años después, en 1982, los principales rotativos, como *Excélsior*, ya informaban que «el 80 por ciento de las tierras de temporal de municipios vecinos estaban abandonadas».

La dependencia de nuevos sistemas de producción, como la planta siderúrgica, que empleó solo a un tercio de los más de 18 000 hombres y mujeres que participaron en su construcción, provocó el descuido de la economía agrícola de Michoacán. Desde entonces —y quizá hasta de forma truculenta— los cambios de fondo que impulsaban nuevas vías de ingreso y ocupación en la entidad tuvieron efectos colaterales para el desarrollo social de las familias; además, dejaron entrever la gran ausencia de una política integral: escasez de servicios públicos, nulo plan de vivienda y, por supuesto, empleo temporal o desempleo.

Por eso, a nadie sorprendió que, al igual que en lugares como Sinaloa, el narcotráfico haya florecido en Michoacán. Bajo ese contexto político, económico y social, la hipótesis de Luis Astorga, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su libro *El siglo de las drogas*, suena verosímil: el Estado mexicano no fue infiltrado ni mucho menos capturado por las mafias; más bien, el narcotráfico nació de su propia estructura y se reforzó con el debilitamiento de las instituciones. La culpa es del Estado.

En el caso de Michoacán, no es fortuito que personajes como Oseguera hayan sorteado las crisis echando mano de lo que la propia crisis les ofreció. Ocupó los resquicios bien habidos y mal habidos de la economía para generar un ingreso que, al día de hoy, se niega públicamente por el Gobierno federal como parte del Producto Interno Bruto (PIB).

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, el presupuesto de una familia rural en Michoacán podía integrarse por los ingresos sumados del padre, por trabajar en el cultivo de frutales; de la madre, como comerciante en un establecimiento de comida; y de un par de hijos, que laboraban lo mismo de albañiles que de mamposteros o como conductores de automóviles de carga. En otras zonas, la siembra y cosecha de marihuana seguían siendo parte de la cotidianeidad. Desde 1940, Michoacán fungía como proveedor de la planta verde y de amapola a Sinaloa. En 1980 hubo un cambio, cuando se instauraron algunas de las principales rutas de cocaína de México hacia Estados Unidos.

Uno de los primeros políticos en advertir que la economía formal fue devorada por la informal y la ilegal fue el entonces gobernador de Michoacán, José María Mendoza Pardo (1944-1949), con informes castrenses de la comandancia militar de la zona en mano. Casi una década después, el entonces representante del Ministerio Público Federal de la entidad, Jesús González Bustos, le dijo al exmandatario David Franco Rodríguez (1956-1962) que en Aguililla los plantíos de maíz y frijol ya habían sido sustituidos por marihuana y amapola, tal como apunta el doctor en Ciencia Social por El Colegio de México, Enrique Guerra Manzo, en su obra *Territorios violentos en México. El caso de Tierra Caliente, Michoacán*, publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en 2022.

La riqueza no era accesible para todos, pero el tráfico de drogas comenzaba a brindar un atisbo de poder, una forma de ganar dinero en la clandestinidad, en el hampa. Después de todo, la sociedad michoacana, fiel a su estilo, se resistía a que se la llevara el carajo.

Para 1986, cuando Rubén ya tenía 20 años, el legado de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como gobernador de Michoacán (1980-1986) «había provocado un déficit creciente en las finanzas públicas y, sobre todo, una disminución de las partidas de inversión». En su último año de gestión, la deuda pública rebasó el 50% del presupuesto anual de la tesorería del estado, una práctica que continuaría con sus sucesores, Luis Martínez Villicaña (1986-1988) y Genovevo Figueroa Zamudio (1988-1992), tal como consta en el libro *Cárdenas el pequeño*, de Romeo Ortega, publicado en 1986.

Y no solo eso: en los Gobiernos estatales comenzaban a relucir las prácticas corruptas del sistema político, sobre todo las que se tejían con las asociaciones ejidales y los propietarios privados. Lo anterior provocaría la consolidación de un caciquismo violento y sustentado en la impunidad. Mientras las empresas y los comercios locales se iban a la ruina, la infraestructura oficial quedó en el abandono; los productores agrícolas ya no reinvirtieron su dinero y las grandes compañías trasnacionales cancelaron sus acuerdos y huyeron con sus capitales.

Apelando a un sentido de supervivencia más que a una tradición del estado, Michoacán aprovechó el clima y las extensas serranías —mal comunicadas y con escasa presencia de fuerzas del orden— para expandir los cultivos de marihuana y amapola en la región de Tierra Caliente, que se extiende desde los límites con Jalisco hasta la frontera con Guerrero; al norte la delimita la zona aguacatera y, al sur, la Sierra Madre.

Desde 1940 hasta 1980, el narcotráfico operó con tranquilidad en la región. Si bien los plantíos de enervantes eran ilegales y constantemente estaban sometidos a operativos para su destrucción, así como a la detención de sus productores a manos del Ejército y la Policía, también eran tolerados por las autoridades mediante sobornos. Los pobladores, beneficiarios de forma directa o indirecta de los cultivos de drogas, también toleraron las actividades ilegales del narco. La permisividad del Estado y el cobijo de la sociedad fueron la ecuación perfecta para una entidad ávida de flujo económico. Todos le daban un pellizco al pastel.

Durante esas cuatro décadas, los productores michoacanos de droga estuvieron subordinados a otras organizaciones criminales, como el pujante Cártel de Guadalajara, al que suministraban marihuana y amapola para su envío a Sinaloa. En ese entonces, los jefes eran Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Este triunvirato propició que no se forjaran mafias locales. La protección discreta —a la postre, cínica— del Gobierno federal a los narcotraficantes no solo arropó a los capos de la vieja guardia, sino que también brindó una falsa paz en un entorno de ilegalidad.

Rubén Oseguera no fue un improvisado en el mundo de las drogas. En 1980, a los 14 años, fue testigo de cómo las nuevas rutas habilitadas para el tráfico de cocaína en México por el Cártel de Guadalajara comenzaron a beneficiar a otros grupos que, rápidamente, crecieron en el hampa: el Cártel del Golfo, a cargo de Juan García Ábrego; el Cártel de Tijuana, comandado por Benjamín y Ramón Arellano Félix; el Cártel de Juárez, presidido por Rafael Aguilar Guajardo; y, no menos importante, el Cártel del Milenio, de Armando Valencia Cornelio, el Maradona. En el futuro, Valencia

sería su mentor y socio criminal: le haría descubrir la industria aguacatera, así como el mundo de la criminalidad.

Con la demanda estadounidense sostenida por la columna vertebral de la producción de drogas que representaban —y siguen representando— México y países de Centro y Sudamérica, los capos no solo operaron vías aéreas, sino también rutas marítimas por el océano Pacífico y el golfo de México. Así, con la inventiva latinoamericana, comenzó el auge del narcotráfico con la proliferación de narcolanchas rápidas, semisumergibles y sumergibles. Uno de los estados más beneficiados por el comercio ilícito de enervantes fue, nuevamente, Michoacán.

Cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) impulsó la apertura del sector agropecuario a la inversión privada, casi de inmediato se retiraron los apoyos oficiales al campo y a los productores rurales. La falta de asistencia social y la descapitalización de este sector compensaron el mercado ilícito, que encontró una oportunidad de oro en un tejido social deteriorado: persuadir a las poblaciones rurales para cultivar drogas en cualquier espacio, por más recóndito que estuviera. Y así ocurrió de manera sistemática.

Tanto el mercado michoacano de limón como el de melón estuvieron sometidos durante mucho tiempo a las decisiones unilaterales de empresarios estadounidenses coludidos con las principales asociaciones de productores del estado. En aquella época, el comprador y el vendedor fijaban precios —en ocasiones exorbitantes— para obtener rentabilidad, ya que el sobrecosto no solo permitía un amplio margen de ganancia a los gringos, sino también repartir una gran tajada a los directivos mexicanos que negociaban a un precio más bajo sus cosechas, a cambio de contratos para el uso de sus tierras casi todo el año. Algunos gobernantes de aquella época

ensalzaron el buen entendimiento entre ambas naciones en materia de agricultura; sin embargo, esta relación solo se tradujo en un modelo de desarrollo que dio origen a interminables juicios por invasión de tierras, una inusitada escalada de violencia y un mayor control del campo a manos de los cárteles de la droga.

Después de todo, en 1964 los michoacanos ya habían experimentado el abuso descarado de las autoridades y de otros más que aspiraban a puestos de elección popular. Algunos informes judiciales de la Secretaría de Gobierno de la época informaron al entonces mandatario Agustín Arriaga Rivera (1962-1968) que en regiones como Apatzingán, Buenavista y Gabriel Zamora había miembros del Partido Popular Socialista (PPS) y del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) que les prometían reparto agrario a sus seguidores. A costa de algunos propietarios de la región, permitían la venta y renta no regulada de parcelas. A lo largo del tiempo, los campesinos fueron oprimidos por los gobiernos; después, por los cárteles coludidos con el Gobierno y, finalmente, solo por los cárteles.

El largo litoral de Michoacán, de más de 230 km de extensión, y el próspero puerto de Lázaro Cárdenas, marcaron un parteaguas para la región. De ser un proyecto político y económico que potenciaría la puerta de entrada de México al mundo comercial, terminó siendo un acceso restringido y autorizado por los ambiciosos jefes de la mafia. Ellos fijaban la oferta y la demanda, comenzaron a hablar en dólares; los gramos se convirtieron en kilos y, muy pronto, en toneladas. Eso sin dejar de mencionar que, para la década de los noventa, se introdujo la producción de drogas sintéticas como la metanfetamina, un psicoestimulante cuyos precursores químicos provenían de Asia a través del Pacífico para desembarcar en tierras michoacanas.

Tierra Caliente en Michoacán pudo haber sido el proyecto insignia del campo; sin embargo, fue el asidero del crimen organizado. Se trató de una veta que hallaron los grupos de la ilegalidad para fortalecer su mercado a través de los vacíos del Estado. Mientras el Gobierno negaba apoyos, los narcos generaban empleos; en poco tiempo, el campo dejó de producir algodón, melón y sandía y se volcó al procesamiento fino de drogas.

Tal como apunta el doctor en Antropología por la UAM, Salvador Maldonado Aranda, en su investigación *Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán*, los negocios ilegales son, en la mayoría de las ocasiones, el sustento de los procesos de inversión legal. Lo mismo ocurre con los capitales acumulados que no encuentran rentabilidad —como la derrama económica de la actividad agrícola— ante la carencia de inversiones y transacciones legales. Esos bordes están tan conectados, según el académico, que tales esferas «se vuelven indivisibles por medio del lavado de dinero».

La relación entre narcotraficantes michoacanos y políticos de todas las corrientes partidistas ha sido más compleja de lo que suele creerse: es borrosa y, a la vez, indivisible, en especial cuando la complicidad criminal requiere mayor protección oficial ante las campañas de erradicación o el prohibicionismo y, sobre todo, cuando desde el poder oficial exige mayores incentivos para la compra de voluntades que se traducen en silencio institucional. Se trata de una relación simbiótica y nociva que obliga a cuestionar quién es el bueno y quién el malo, el que prohíbe o el que permite, el que opera o el que financia, el que cobra impuestos o el que exige cuotas. Lo único cierto es que el crimen está muy bien organizado.

En las décadas de los ochenta y noventa, Luz Nereida Pérez Prado, doctora en Antropología Social por la Universidad de

Mánchester, conversó con pobladores de la zona de Tierra Caliente; desde entonces, las comunidades más desvalidas ya definían el narcotráfico como «una nueva forma de corrupción política». A esta práctica rapaz le atribuían algunas propiedades que bien podrían referirse a algún remedio milagroso: «Es benéfica», decían. «Es mejor que las formas de antes», explicaban, refiriéndose a la otrora hegemonía política del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus caciquismos.

En ocasiones, el argumento de los michoacanos era tan simplista que los empujó hacia la debacle o, tal vez, era un vaticinio de la economía sostenida por el narcotráfico. Así lo deja entrever la doctora Pérez Prado, quien documentó el *modus vivendi* de las comunidades michoacas que hoy subcontrataron su destino a las transnacionales de las drogas: «El narcotraficante es distinto al cacique, pues este no necesita dinero del pueblo para enriquecerse; al contrario, realiza mejoras en los servicios de la comunidad sin necesidad de hacerse rico a expensas de los ejidatarios».

Y no solo eso. Con el paso de los años, la migración internacional también modificó la percepción criminal en Michoacán y, en realidad, en todo México. Los cambios sociales y culturales asociados al estatus socioeconómico y el prestigio avalaron al narcotráfico como la mejor forma de ascender en la muy desigual división de clases. Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo comenzaron a ser figuras aspiracionales debido, en parte, al abandono del campo por parte de la Federación. Este hecho es sintomático de un Gobierno federal indolente, pues mientras no existían apoyos mínimos para la compra de semillas de frijol o maíz cuando las remesas familiares escaseaban, los campesinos tuvieron que aceptar la oferta de intermediarios del narco que los invitaban a la siembra de

marihuana en la sierra. A pesar del riesgo de ser llamados marihuaneros y perder sus plantaciones, los campesinos aceptaron sembrar la hoja verde. Las opciones para paliar su precaria economía se habían agotado.

Así llegaría Rubén Oseguera a enfrentarse a un sistema político quebrado y a un lucrativo mercado de las drogas que comenzó a «democratizarse». Conforme las figuras del hampa se fueron empoderando, ayudaron a generar una narconarrativa rentable para el Estado, una en la que los «malos» eran los causantes de la desgracia nacional; aunque, en la praxis, esos supuestos maleantes también operaban con traje y corbata en las cúpulas políticas y empresariales. A partir de esta figuración, es válido plantearse cuántos Rubén forjó Michoacán y cuántos siguen en operación. No hay un territorio en México que no esté controlado por algún cártel de la droga o alguna mafia que se haya beneficiado de la fragilidad de las instituciones del país.

La última vez que la clase gobernante habló de los «narcos de antes» fue para referirse a los viejos lobos de mar, para nombrar a los miembros de los predominantes cárteles de Guadalajara y del Golfo, los cuales tuvieron su auge entre 1940 y 1980. Eran los capos al servicio del Estado. Mientras el «sistema de control de plazas del crimen organizado» —como los nombra el doctor Guerra Manzo en su obra—, instrumentado por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), fue eficaz, se permitió que el propio Gobierno recibiera bienes tangibles, como dinero, e intangibles, como hacer sentir su poder sobre la población; todo lo anterior a cambio de autorizar plazas.

Una de las consecuencias que no contemplaron los funcionarios públicos fue que los pactos con los cárteles de la droga, por más incipientes que fueran, terminarían por superarlos. Ahora estos, con

las instituciones de seguridad y justicia capturadas y con el monopolio de la fuerza, podían vulnerar a los gobiernos y, sobre todo, a la población civil. De pronto, el aparato policiaco se convirtió en una agencia criminal al servicio de las mafias; los trabajadores del campo fueron turnados a una nómina criminal, y los aspirantes políticos, avalados por el líder de un cártel con fuerza táctica y operativa en la sindicatura, regiduría, municipio o estado de la República mexicana que quisieran administrar. Surgió una nueva secretaría en la estructura orgánica gubernamental: la del narco.

En ese tenor, Oseguera no solo corrompió al sistema de procuración de justicia: lo moldeó completamente a su antojo. Desde policías locales hasta altos mandos del Ejército e, incluso, alcanzaría su apogeo con la connivencia de colaboradores cercanos de, por lo menos, tres expresidentes: Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Tres partidos políticos distintos. La misma cara de la corrupción.

Transcurrían los primeros días de febrero de 2026. Ahí estaba yo, un periodista de 34 años, instalado en un viejo cuarto de hotel en la comunidad de Naranjo de Chila, postrado frente a mi computadora, la de batalla, bajo una tenue luz amarilla. El termómetro marcaba 20 °C; por la mañana, el sol quiso fundirme con sus 35. Acatando las reglas ortodoxas del periodismo, pude constatar a ras de suelo cómo se vive la noche en un pueblo que nunca duerme, que permanece alerta. Una región que padece el peor síntoma de la violencia: el silencio. Nada ni nadie se mueve sin la venia del narco. En la zona no hallé a ningún temerario que subiera el volumen de su televisor en la madrugada. Los motores de los pocos autos que

circulan a diario no rugen después de las 19:00 h. Sería una provocación.

Salgo del hotel a tomar el aire. Doy unos pasos a la derecha y luego los deshago para avanzar hacia la izquierda. El silencio me aturde. Casi puedo oír mis palpitaciones. La sombra de Rubén yace en cada rincón, y cada rincón parece seguir perteneciéndole.